

SPANISH-LANGUAGE

Carta al Fiscal General de Guatemala sobre libertad de prensa y criminalización de periodistas

21 de mayo de 2026

Señor Gabriel García Luna Fiscal General de la República Ministerio Público de Guatemala

Señor Fiscal General:

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por su nombramiento como Fiscal General de Guatemala. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión y en el cumplimiento de sus responsabilidades al frente del Ministerio Público.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y el uso del Ministerio Público, durante los últimos ocho años, como una herramienta de criminalización para perseguir, intimidar y silenciar a periodistas, medios independientes y voces críticas que denunciaron corrupción y abusos de poder en Guatemala.

Diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y organizaciones enfocadas en la promoción de la libertad de prensa y de derechos humanos, han documentado un patrón sostenido de persecución judicial, hostigamiento, amenazas, vigilancia, campañas de difamación, exilio forzado y detenciones arbitrarias contra periodistas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha advertido reiteradamente que el uso indebido del derecho penal y de las instituciones de justicia para castigar expresiones críticas constituye una grave violación a la libertad de expresión y genera un efecto inhibitorio incompatible con una sociedad democrática. Asimismo, la CIDH ha señalado que el exilio forzado de periodistas es uno de los indicadores más alarmantes del deterioro democrático en las Américas y una consecuencia directa de la persecución estatal y la falta de garantías para ejercer el periodismo libremente.

El caso del periodista Jose Rubén Zamora se convirtió en el símbolo más visible de esta política de persecución. Su encarcelamiento arbitrario, las condiciones de su detención y los procesos espurios promovidos en su contra fueron ampliamente denunciados por organismos internacionales como represalias por su labor periodística y sus investigaciones sobre corrupción.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha documentado cientos de agresiones y restricciones contra periodistas durante los últimos años, incluyendo acoso judicial, intimidación, criminalización y ataques al ejercicio periodístico. De acuerdo con informes públicos citados por organizaciones internacionales, más de 20 periodistas guatemaltecos se vieron forzados al exilio entre 2022 y 2023 como consecuencia de amenazas, persecución judicial y temor fundado de represalias.

A ello se suma la persistencia de ataques y asesinatos contra periodistas en condiciones de alta impunidad. La falta de investigaciones diligentes y sanciones efectivas ha contribuido a consolidar un clima de miedo y autocensura incompatible con los estándares democráticos y las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala.

La continuidad de estas prácticas debilitó el Estado de Derecho, erosionó la confianza ciudadana en las instituciones y envió un mensaje de miedo a quienes ejercen el periodismo independiente.

Ante el inicio de una nueva etapa en el Ministerio Público, solicitamos respetuosamente que su gestión marque un cambio claro, verificable e inmediato mediante las siguientes acciones:

1. Poner fin de manera inmediata al uso del derecho penal y de las fiscalías como mecanismos de persecución política y criminalización contra periodistas y medios independientes.
2. Desestimar y archivar todos los procesos espurios, arbitrarios o sin sustento promovidos contra periodistas y comunicadores por motivos relacionados con su labor informativa.
3. Garantizar plenamente la libertad de prensa y de expresión consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.
4. Actuar para que los derechos y la libertad de los periodistas que fueron arbitrariamente detenidos o continúan sometidos a medidas judiciales desproporcionadas derivadas de procesos de criminalización sean plenamente restablecidos.
5. Crear condiciones reales y garantías de seguridad para que periodistas y comunicadores forzados al exilio puedan regresar a Guatemala sin temor a represalias, detenciones arbitrarias o persecución judicial.
6. Fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para que el Ministerio Público investigue de manera independiente, imparcial y efectiva las amenazas, agresiones y crímenes cometidos contra periodistas, garantizando justicia y sanción para los responsables materiales e intelectuales.
7. Reconstruir la independencia y credibilidad del Ministerio Público, asegurando que ninguna fiscalía vuelva a ser utilizada para proteger intereses políticos o redes de corrupción.

La libertad de prensa no puede existir bajo amenaza, miedo o persecución. Guatemala necesita instituciones que protejan el derecho ciudadano a informar y ser informado, y no estructuras utilizadas para castigar el periodismo independiente.

La CIDH y su Relatoría Especial han recordado que el Estado tiene la obligación no sólo de abstenerse de perseguir periodistas, sino también de generar condiciones reales para el ejercicio seguro e independiente del periodismo, prevenir la estigmatización desde el poder público y combatir la impunidad de los crímenes contra la prensa. El restablecimiento de estas garantías es indispensable para la reconstrucción democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.

Confiamos en que esta nueva administración del Ministerio Público asumirá la responsabilidad histórica de poner fin a los años de criminalización y devolver garantías democráticas fundamentales para el ejercicio libre del periodismo. Asimismo, los abajo firmantes seguimos trabajando activamente en apoyo al estado de derecho en Guatemala y nos ponemos a su disposición para mantener un canal de comunicación abierto con su oficina a fin de colaborar en estas tareas.

Atentamente,

FIRMAS

Committee to Protect Journalists
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Protección Internacional Mesoamérica
Red Centroamericana de Periodistas (RCP)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Free Press Unlimited (FPU)
Fundamedios
Reporteros Sin Fronteras (RSF)

ENGLISH LANGUAGE

Thursday, May 21, 2026

Mr. Gabriel García Luna
Attorney General
Public Prosecutor's Office of Guatemala

Mr. Attorney General:

We extend our sincere congratulations on your appointment as Attorney General of Guatemala. We wish you every success in your tenure and in the fulfillment of your responsibilities at the head of the Public Prosecutor's Office.

The undersigned organizations express our deep concern over the deterioration of press freedom and the use of the Public Prosecutor's Office, over the past eight years, as a tool of criminalization to persecute, intimidate, and silence journalists, independent media outlets, and critical voices that have exposed corruption and abuses of power in Guatemala.

National and international bodies, including the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, the Guatemalan Journalists Association (APG), and organizations focused on promoting press freedom and human rights, have documented a sustained pattern of judicial persecution, harassment, threats, surveillance, smear campaigns, forced exile, and arbitrary detentions against journalists.

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression has repeatedly warned that the misuse of criminal law and justice institutions to punish critical expression constitutes a serious violation of freedom of expression and creates a chilling effect incompatible with a democratic society. Likewise, the IACHR has noted that the forced exile of journalists is one of the most alarming indicators of democratic deterioration in the Americas and a direct consequence of state persecution and the lack of guarantees for the free exercise of journalism.

The case of journalist Jose Rubén Zamora has become the most visible symbol of this policy of persecution. His arbitrary imprisonment, the conditions of his detention, and the spurious legal proceedings brought against him have been widely denounced by international organizations as retaliation for his journalistic work and investigations into corruption.

The Guatemalan Journalists Association (APG) has documented hundreds of attacks and restrictions against journalists in recent years, including judicial harassment, intimidation, criminalization, and attacks on the practice of journalism. According to public reports cited by international organizations, at least over 20 Guatemalan journalists were forced into exile between 2022 and 2023 as a result of threats, judicial persecution, and a well-founded fear of reprisals.

This situation is compounded by the persistence of attacks and killings of journalists under conditions of high impunity. The lack of diligent investigations and effective sanctions has contributed to the consolidation of a climate of fear and self-censorship incompatible with democratic standards and Guatemala's international obligations.

The continuation of these practices has weakened the rule of law, eroded public trust in institutions, and sent a message of fear to those engaged in independent journalism.

At the beginning of a new stage within the Public Prosecutor's Office, we respectfully request that your administration marks a clear, verifiable, and immediate change through the following actions:

1. Immediately end the use of criminal law and prosecutorial offices as mechanisms of political persecution and criminalization against journalists and independent media.
2. Dismiss and close all spurious, arbitrary, or unfounded cases brought against journalists and communicators in relation to their reporting.
3. Fully guarantee freedom of the press and expression as enshrined in the Political Constitution of the Republic of Guatemala and in international human rights treaties ratified by the State.
4. Take action to ensure the rights and freedom of journalists who have been arbitrarily detained or who continue to face disproportionate judicial measures resulting from criminalization processes are fully restored.
5. Create real conditions and security guarantees for journalists and communicators forced into exile to return to Guatemala without fear of reprisals, arbitrary detention, or judicial persecution.
6. Strengthen the institutional capacity of the Prosecutor's Office for Crimes Against Journalists so that the Public Prosecutor's Office investigates—in an independent, impartial, and effective manner—threats, attacks, and crimes committed against journalists, ensuring justice and accountability for both material and intellectual perpetrators.
7. Rebuild the independence and credibility of the Public Prosecutor's Office, ensuring that no prosecutorial office is ever again used to protect political interests or corruption networks.

Press freedom cannot exist under threat, fear, or persecution. Guatemala needs institutions that protect the public's right to inform and be informed, not structures used to punish independent journalism.

The IACHR and its Special Rapporteur have emphasized that the State has the obligation not only to refrain from persecuting journalists but also to create real conditions for the safe and independent practice of journalism, prevent stigmatization from public authorities, and fight impunity for crimes against the press. The restoration of these guarantees is essential for democratic reconstruction and the strengthening of the rule of law in Guatemala.

We trust that this new administration of the Public Prosecutor's Office will assume the historic responsibility of putting an end to years of criminalization and restoring fundamental democratic guarantees for the free exercise of journalism. Additionally, the undersigned remain active in support of rule of law in Guatemala and we offer to maintain an open channel of communication with your office to support in these tasks.

Sincerely,

SIGNATURES

Committee to Protect Journalists
ARTICLE 19 Mexico and Central America
Inter American Press Association (IAPA)
Protection International Mesoamerica
Central American Journalists Network
Foundation for Press Freedom (FLIP)
Free Press Unlimited (FPU)
Fundamedios
Reporters Without Borders (RSF)